

Señores:

**JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN**

[admin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:admin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**REFERENCIA: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**  
**RADICADO: 19001-33-33-009-2018-00331-00**  
**MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA**  
**DEMANDANTES: JORGE ELIECER NARVAEZ Y OTROS**  
**DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y OTROS**  
**LLAMADO EN GTÍA.: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C Y OTROS**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con cédula de ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C. S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado de **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.**, mediante el presente escrito procedo a **REASUMIR** el poder a mi conferido en el proceso de la referencia, y a presentar dentro del término legal, los **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**; solicitando desde ya, se profiera sentencia favorable a los intereses de mi representada, negando las pretensiones de la demanda por no demostrarse la responsabilidad administrativa que se pretendía endilgar a **BANCOLOMBIA S.A.**, **JESÚS ORLANDO ARCOS NARVÁEZ**, **ANDRÉS FELIPE ORTEGA** y a mi prohijada, con fundamento en los siguientes argumentos que concretaré en los acápite siguientes.

### **CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD.**

En la audiencia de pruebas celebrada el 6 de junio de 2024 el Juzgado Noveno Administrativo de Popayán declaró cerrada la etapa probatoria y corrió traslado por el término común de diez (10) días hábiles para que las partes presentaran alegatos de conclusión por escrito, cuyo decurso inició el día 7 de junio de 2024 y fenece el día 21 de junio de la misma anualidad. De manera que el presente escrito se radica en la oportunidad procesal respectiva.

### **CAPÍTULO II. FRENTE A LO PROBADO EN LA DEMANDA**

#### **A. SE DEMOSTRÓ LA CONFIGURACIÓN DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA EN LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS, COMO CAUSAL EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD**

La parte actora sostiene que el señor Jorge Eliecer Narváez el 20 de noviembre de 2017 se desplazaba por el kilómetro 100 + 100 de la vía Panamericana, sobre los municipios de Marcaderes - Mojarras, en la motocicleta de placas DLP 87D, cuando fue colisionado por el vehículo tipo tracto - camión de placas WDK 252, presuntamente por una maniobra irresponsable de este último. A pesar de su afirmación, omiten que el accidente de tránsito en el cual resultó lesionado el señor Narváez fue consecuencia directa de su actuar determinante e imprudente, toda vez que condujo sin contar con licencia de conducción, sin elementos de

protección, sin SOAT, sin revisión tecnicomecanica y remolcando una carretilla y elementos de construcción. De manera que, desatendió las normas de tránsito, ignorando su entorno y provocó exclusivamente la concreción de sus daños.

El Código Nacional de Tránsito Terrestre dispone varias normas que fueron vulneradas con la conducta del señor Jorge Eliecer Narváez, concretamente las siguientes:

**Artículo 42. Seguros obligatorios.** Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se regirá por las normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

**Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos.** Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

**Artículo 55. Comportamiento del conductor, pasajero o peatón.** Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.”

**Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos.** Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

- Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.

**Artículo 96. Normas específicas para motocicletas, motociclos y mototriciclos.** Las motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas:

1. Deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del Presente Código.

**2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor.**

3. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales. De igual forma utilizar, en todo momento, los espejos retrovisores.

**4. Todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas.**

5. El conductor y el acompañante deberán portar siempre en el casco, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, el número de la placa del vehículo en que se transite, con excepción de los pertenecientes a la fuerza pública, que se identificarán con el número interno asignado por la respectiva institución.

**6. No se podrán transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías.**

Al respecto, de la culpa exclusiva de la víctima en accidentes de tránsito el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera:

Ahora bien, como es sabido, la conducción de vehículos automotores es una actividad que implica la manipulación de máquinas (carros, motocicletas, buses,etc.) cuya ejecución

comporta alta probabilidad de causar daños a terceros y a quien la ejecuta, pero que, no obstante, su peligrosidad, es permitida, en consideración a su utilidad y necesidad, sin perjuicio de que sea adecuadamente reglamentada a través de normas que disminuyan al máximo la concreción de los riesgos ínsitos de la misma. Así, quien ejecuta este tipo de actividades está expuesto a una reglamentación especial y adicional respecto de quien no la ejerce, toda vez que debe garantizar que aun en su desarrollo, adopta las medidas adicionales a las exigibles a una persona ordinaria a efectos de evitar la consolidación de daños y si llega a padecerlos, sólo le serán indemnizables en tanto el demandado no demuestre la contribución efectiva y determinante de su descuido o negligencia en el hecho lesivo, pues de otro modo tendrá que cargar con las consecuencias nocivas de su falta de prudencia, por falta de fundamento en la imputación de responsabilidad.<sup>1</sup>

Ahora bien, con las pruebas obrantes en el proceso se constató que el señor Jorge Eliecer Narváez hizo caso omiso a las previsiones normativas y causó su propio daño. En primer lugar, se debe tener en cuenta la confesión realizada por el demandando en las respuestas al interrogatorio de parte formulado por los demandados, en la cual se afirma que para el momento de los hechos el señor Narváez conducía el automotor sin tener la debida licencia de conducción. La licencia para conducir motocicleta es el documento público que expiden las autoridades de tránsito y transporte, que da fe pública sobre la idoneidad de las personas para el ejercicio de la conducción. Así lo indica el mismo Código Nacional de Tránsito en su art. 2: “... *Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional...*”

Para obtener cualquier licencia de conducción un ciudadano debe demostrar o cumplir con una serie de requisitos legales, que están instituidos en el art. 19 del Código Nacional de Tránsito, entre los cuales interesa resaltar:

- c) Aprobar exámenes teórico y práctico de conducción para vehículos particulares, ante las autoridades públicas o privadas que se encuentren debidamente registradas en el sistema RUNT.
- d) Obtener un certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística registrado ante el RUNT
- e) Presentar certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por una Institución Prestadora de Salud o como un Centro de Reconocimiento de Conductores, registrado ante el RUNT.

Por ello, el hecho de que el señor Jorge Eliecer Narváez no contara con ninguna licencia de conducción, quiere decir que no certificó nunca su aptitud en conducción, jamás aprobó los exámenes legales teóricos y menos prácticos, y las autoridades no pueden dar cuenta de su aptitud física, psíquica ni emocional para conducir automotores. Por lo anterior el Ministerio Nacional de Transporte expidió la Resolución 1600 de 2005 que reglamentó con mayor precisión los contenidos de los exámenes teórico y práctico y estableció lo que evalúa el Estado, a través de particulares delegados para acreditar la idoneidad de los conductores.

Por otra parte, se demostró que la motocicleta de placas DLP 87D no contaba con revisión técnico – mecánica vigente para el momento de los hechos, lo cual no solo representa una infracción a las normativas de tránsito, sino que también impide conocer el estado del vehículo al momento

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia 30 agosto de 2022, Exp. 56176

del siniestro, como las condiciones y desgaste de las llantas, la eficacia del sistema de iluminación, el funcionamiento adecuado de los frenos, el rendimiento del motor, entre otros aspectos de vital importancia para conducir en una vía de nivel nacional.

Finalmente, es de gran relevancia mencionar que el demandante también admitió que, al momento del accidente, la motocicleta transportaba un buggy o carretilla en su parte posterior. Este objeto era sostenido o halado por el parrillero, lo cual constituye una práctica extremadamente peligrosa y prohibida por las normas de tránsito. Tal carga no solo altera significativamente el centro de gravedad del vehículo, sino que también compromete seriamente la estabilidad y maniobrabilidad de la motocicleta. Además del buggy, se transportaban una pala, una pica y unos conos, lo que incrementaba aún más el peso y el desequilibrio del vehículo, aumentando los riesgos ya presentes.

Con todo se demostró que el accidente de tránsito ocurrió porque el señor Jorge Eliecer Narvárez no solamente no era apto para conducir motocicleta si no que además lo realizó transportando objetos prohibidos e infringiendo otras normas de tránsito: omitir portar los elementos de seguridad, como el chaleco reflectivo, y desplazarse por fuera del metro entre la vía y la brema o andén. En otras palabras, se puede decir que, si el conductor de la motocicleta hubiese realizado la actividad de manera prudente y respetando las normas de tránsito dispuestas el accidente no se hubiera generado. Esta apreciación significa que lo realmente determinante en la producción del resultado no fue la aparición del vehículo tipo tracto - camión, si no que el demandante condujera de manera imperita. En el mismo sentido, se puede concluir que si una persona transita prudentemente el desenlace no sería el que se presenta en los hechos de la demanda.

En conclusión, y después de haber realizado una interpretación de los elementos de convicción, es evidente que fue la víctima quien provocó su propio daño al conducir sin licencia, incluso aumentando su riesgo al transportar elementos en la parte de atrás de la motocicleta. Por lo tanto, es quien deberá asumir las consecuencias de su comportamiento y no atribuirlo a Bancolombia S.A, Jesús Orlando Arcos, Andrés Felipe Ortega, ni a la llamada en garantía dado que, con la configuración de esta casual de exoneración se rompió por completo el nexo causal entre el daño y la imputación.

## **B. NO SE ACREDITÓ LA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE BANCOLOMBIA S.A., JESÚS ORLANDO ARCOS NARVÁEZ Y ANDRÉS FELIPE ORTEGA ORTEGA**

Según se expone en la demanda, los perjuicios sufridos por los demandantes se ocasionaron a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 20 de noviembre de 2017, entre la motocicleta de placas DLP 87D conducida por el señor Jorge Eliecer Narvárez y el vehículo tipo tracto-camión de placas WDK 252 conducido por el señor Andrés Felipe Ortega, el cual era objeto de un contrato de leasing entre Bancolombia S.A. y el señor Jesús Orlando Arcos como locatario. Según la parte actora la colisión la provocó la conducción irresponsable del señor Ortega. Sin embargo, no se probó ninguna acción u omisión de los demandados que configurará un daño antijurídico imputable a estos.

Según lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, que la demandante es quien debe evidenciar de manera inequívoca y sin lugar a dudas que se configuraron los elementos que estructuran la responsabilidad y no lo hace. Además, es importante hacer referencia a los pronunciamientos del Consejo de Estado, que señalan:

No basta con la demostración de la existencia del daño, tema sobre el cual existen suficientes pruebas en el sub exámine que no vale la pena reseñar, pues en todo caso es indispensable acreditar la imputación del mismo a la entidad pública demandada y en este estadio procesal no es posible revivir las discusiones sobre el decreto de medios de prueba que en su momento fueron negados. Suficiente lo expuesto en precedencia para proceder a confirmar el fallo impugnado, **en la medida que el demandante incumplió la carga probatoria que le correspondía de demostrar, a más de la existencia del daño, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su causación, elementos indispensables para realizar el juicio de imputación necesario para estructurar la responsabilidad patrimonial deprecada.**<sup>2</sup>  
(Énfasis propio)

Una de las implicaciones más importantes al determinar el régimen de responsabilidad es el comportamiento de las partes. El régimen subjetivo de responsabilidad además de ser el postulado general, le impone a la parte demandante la carga probatoria, por tanto, es ella quien debe tener un comportamiento activo en la aportación del material que soporta los supuestos de hecho registrados en la demanda. Como se evidencia en el expediente, las pruebas aportadas resultan insuficientes para configurar los elementos de responsabilidad que se pretende atribuir a Bancolombia S.A., Jesús Orlando Arcos Narvárez y Andrés Felipe Ortega. El Informe Policial de Accidente de Tránsito – IPAT No. C- 00053007 y su croquis adjunto no constituyen una prueba eficaz para endilgar responsabilidad a los demandados. En primera medida porque el informe se basa exclusivamente en dos elementos: la posición final de los vehículos, observada por el agente de tránsito al llegar al lugar del incidente y la versión del señor Ildé Molina, identificado como testigo en el informe, pues naturalmente el agente de tránsito no presenció el accidente.

Ahora bien, la declaración del señor Ildé León Molina rendida durante la audiencia de pruebas celebrada el 6 de junio de 2024, reveló importantes limitaciones en su calidad de presunto testigo directo. El señor Molina admitió no haber observado directamente el momento de ocurrencia del accidente. A pesar de su proximidad al lugar de los hechos, mencionó que se encontraba de espaldas al punto exacto de la colisión y se percató porque escucho el golpe. Su percepción del incidente se limitó a escuchar el sonido del impacto, lo cual cuestiona seriamente su capacidad para proporcionar un relato preciso y detallado de los eventos que precedieron y rodearon el suceso. Estas circunstancias ponen en tela de juicio el valor probatorio de su testimonio, especialmente porque no conllevan al conocimiento de la causa del accidente, ni la conducta de los conductores inmediatamente antes de la colisión.

En similar sentido, se debe analizar el Informe de Policía Judicial FPJ-11, suscrito por el Agente

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de junio de 2012, Exp. (23296)

Nixon Adalberto Ortiz, quien afirmó en su declaración ante el despacho que el informe lo realizó con base en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. C- 00053007, el croquis y fotografías en donde se evidencia la presunta posición final de los vehículos involucrado, mismas que fueron aportadas por familiares del señor Gustavo Dorado Cabrera (q.e.p.d.), quienes inicialmente eran demandantes en el presente proceso. El agente de tránsito concluyó que la causa del accidente fue la invasión del carril contrario por parte del conductor del tracto camión de placas WDK 252. Sin embargo, se recalca que, el Informe Policial de Accidente de Tránsito - IPAT, por su naturaleza, no constituye una prueba concluyente de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos. Además, el señor Ortiz omitió considerar las dos hipótesis planteadas en dicho documento: impericia en el manejo para la motocicleta DLP 87D y no estar pendiente de la vía y de los demás actores viales para el tracto-camión WDK 252.

En consecuencia, ninguna de las pruebas aportadas por el extremo actor puede considerarse eficaz para establecer con certeza la responsabilidad que se endilga. Todas se originan de la misma fuente limitada de información y ninguna proporciona una base suficientemente sólida para llegar a una conclusión certera sobre la ocurrencia de los hechos.

Las pruebas que obran en el expediente se fundamentan en la acreditación del daño y no en la imputación. Por esto, ni siquiera indiciariamente podrían servir probatoriamente para realizar un juicio casual y así atribuir responsabilidad a Bancolombia S.A., Jesús Orlando Arcos Narvárez y Andrés Felipe Ortega, pues como se sustentará en el acápite siguiente, la intervención de la víctima fue determinante y exclusiva en la producción del daño, lo cual altera la causalidad e impide que se estructuren los elementos de la responsabilidad para imputar el daño a otra persona diferente que a sí misma.

Con todo, no hay material probatorio idóneo que permita acreditar la imputación como elemento estructural. Como se analizó, el juicio realizado por el demandante para atribuir la causa del daño fue indebido, pues, en primer lugar, no soportó su argumento en las pruebas que debió haber aportado al proceso, y en segundo, no es cierto que Bancolombia S.A., Jesús Orlando Arcos Narvárez y Andrés Felipe Ortega hayan intervenido en la producción del daño.

En conclusión, una vez evidenciada la inexistencia de prueba en el proceso de la acción u omisión de las demandadas que configure responsabilidad, no hay fundamento para declarar la misma y condenar a Bancolombia S.A., Jesús Orlando Arcos Narvárez, Andrés Felipe Ortega ni a mi representada.

**C. DE MANERA SUBSIDIARÍA SE DEMOSTRÓ LA CONFIGURACIÓN DE LA CONCAUSALIDAD O CONCURRENCIA DE CULPAS ENTRE EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO TRACTO - CAMIÓN Y EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA**

Señor juez, si no es de su convencimiento la teoría de la ruptura absoluta del nexo de causalidad por la ocurrencia de una causa extraña mencionada en un acápite anterior, de manera subsidiaria ruego se tenga en cuenta la figura de la concausalidad contemplado el artículo 2357 del Código Civil el cual estipula que "*la apreciación del daño está sujeto a la reducción, si el que*

*lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente".* Dado que quedó demostrado en todo el material probatorio allegado que la víctima contribuyó con la ocurrencia de su propio daño.

Esto con el fin de disminuir la indemnización a que hubiere lugar, en proporción a su contribución al daño por ella sufrido. Así es como lo ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado:

[S]e encuentra que efectivamente existe un actuar culposo de una de las víctimas fatales – Thomas Quinn – por cuanto llevó a cabo la conducción de un vehículo automotor encontrándose con una embriaguez clínica grado II, situación en la cual “se encuentra comprometida la coordinación motora, la percepción sensorial, la velocidad de los reflejos, etc, todo esto se constituyen en un impedimento para la conducción adecuada de un vehículo automotor” razón por la cual habrá lugar a reducir en un porcentaje la declaratoria de responsabilidad de las demandadas, pues no hay lugar a predicar en el caso que el resultado dañoso sufrido por los esposos Quinn se explica única y exclusivamente por las condiciones del conductor del vehículo. (...)Y ello es así por cuanto, como lo indicaron los estudios adelantados en 1998 y 1999, sencillamente el puente no debió estar al servicio de la ciudadanía por los defectos técnicos que suponían una situación de riesgo para quienes lo empleaban. Por consiguiente, sobre esta base la Sala considera que la participación de responsabilidad de las Entidades demandadas debe ser valorada sobre un setenta (70%), contra un treinta (30%) que imputable al actuar culposo de Thomas Quinn. Para la Sala es claro que debe mantenerse la concurrencia de culpas, en la proporción mencionada, porque se probó fehacientemente la existencia de defectos en el viaducto que generaban un riesgo para el tránsito seguro y una inadecuada señalización e iluminación de la vía, pero éste se concretó también por la actuación culposa de la víctima, es decir, que estas circunstancias están unidas inescindiblemente, al punto de poder afirmar que de no haberse presentado ambas, el resultado probablemente no habría sido catastrófico.

(...)

A juicio de la Sala sí se configuró el hecho de un tercero, ya que se acreditó plenamente que la responsabilidad en la ocurrencia del accidente no puede ser atribuida totalmente a las entidades demandadas, porque a su producción contribuyó el conductor del vehículo, razón por la cual, la condena de perjuicios por la muerte de la señora Reyes de Quinn, también será rebajada en la misma proporción de treinta (30%).<sup>3</sup>

En el presente proceso se denota claramente que la actuación negligente e imprudente de la víctima influyó de manera determinante en la ocurrencia de los hechos. El señor Jorge Eliecer Narváez dejó al libre arbitrio su propia seguridad al no cumplir las normas de tránsito, sin adoptar las precauciones necesarias y mínimas para evitar el accidente.

Quedó demostrado que el demandante conducía sin tener experiencia para hacerlo y peor aún, sin tener la respectiva licencia que lo acreditara como un conductor apto. Además, se comprobó que la motocicleta no contaba con SOAT, revisión tecnomecánica, el conductor no tenía chaleco reflectivo y transportaba una carga excesiva y peligrosa, incluyendo un buggy o carretilla halada por el parrillero, además de una pala, una pica y conos, comprometiendo severamente la estabilidad y maniobrabilidad de la motocicleta. En consecuencia, la conducta descuidada, desatenta e imperita de la víctima irrespetando las normas de tránsito, constituyen graves faltas de su parte que incidieron en mayor medida en la ocurrencia del fatídico accidente.

Ahora bien, El señor Andrés Felipe Ortega señaló que el vehículo que conducía mide aproximadamente 17 metros de longitud, un dato crucial para entender las maniobras

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de febrero de 2016, Exp. 34553

necesarias en una vía con características de curva cerrada o curvas sucesivas como en el presente caso. Manifestó que era necesario invadir parcialmente el carril contrario al transitar por la curva debido al ancho limitado de la vía. Sin embargo, es claro que su conducta no fue determinante para la ocurrencia de la colisión, porque a pesar de su experiencia de más de 15 años como conductor no fue posible evitarla, dada la pérdida de control de la motocicleta.

Ahora, bajo la lógica de compensación de culpas, resulta proporcionado atribuir un 70% de incidencia a la víctima. Pues se debe reflejar no solo la supuesta falla de los demandados, sino también la multiplicidad de infracciones e imprudencias cometidas por la propia víctima, como conducir de manera negligente, imperita, sin elementos de seguridad y, lo más grave, con varios elementos prohibidos en su parte trasera.

En mérito de lo expuesto y a modo de conclusión, es notorio que la participación causal del conductor de la motocicleta, derivo en sus propias lesiones, adecuándose de facto y de derecho a lo aquí estudiado y debatido. Por lo tanto, el despacho deberá negar las pretensiones de la demanda o determinar el porcentaje y/o proporción de la participación del señor Jorge Eliecer Narváez en aras de fijar el quantum indemnizatorio, que, a juicio de lo esgrimido por este extremo de la litis, no deberá ser inferior al 80%.

#### **D. EL RECONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS SOLICITADOS POR LA PARTE DEMANDANTE RESULTA IMPROCEDENTE EN TANTO NO SE ACREDITÓ SU CAUSACIÓN POR LAS DEMANDADAS**

De acuerdo a lo probado en el plenario, se logró evidenciar que no existe responsabilidad frente a Bancolombia S.A., Jesús Orlando Arcos Narváez y Andrés Felipe Ortega sobre los hechos de la demanda, ni mucho menos en contra de mi prohijada, por cuanto no se aportaron, por la parte actora, los medios de pruebas fehacientes para demostrar la causación de los perjuicios alegados. Las pruebas recaudadas no otorgan una convicción real sobre la producción, naturaleza, y de la cuantía del supuesto detrimento patrimonial irrogado, el cual, al no ser objeto de presunción, no puede ser reconocido sin mediar pruebas conducentes, pertinentes y/o útiles que demuestren su causación.

Además, los perjuicios que se solicitan en la demanda, no fueron debidamente acreditados por la parte actora, quien deliberadamente manifiesta que, por la supuesta conducta de las aquí demandadas, y de la llamada en garantía se les produjo un perjuicio irremediable a las demandantes sin tener las pruebas fehacientes para señalar la configuración del daño.

- **Perjuicios morales:**

Los demandantes pretenden el reconocimiento de perjuicios morales en favor de la víctima directa, así como también de su compañera permanente, hijo, padre y hermanos, en cuantías que no se encuentran fehacientemente demostradas. Conforme al criterio de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, el daño moral debe ser acreditado por quien lo invoca, so pena del rechazo de su pretensión, pues la prueba de dicho perjuicio, se establece por medio

de la construcción de una presunción judicial, a partir de la valoración del indicio del parentesco como hecho conocido.

Al respecto es necesario aclarar que la aplicación de la anterior presunción no genera ningún efecto en la carga de la prueba regulada en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", y que, tratándose de responsabilidad del Estado se entiende que para que el Juez declare que el Estado debe responder patrimonialmente será necesario que el demandante acredite un daño antijurídico y que este sea imputable al Estado por acción u omisión. Sin embargo, los valores solicitados por concepto de perjuicio moral no cuentan con ningún respaldo probatorio, pues según los lineamientos establecidos por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el porcentaje de indemnización debe ser proporcional a la gravedad de las lesiones. Esto se demostraría con un dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado a Jorge Eliecer Narváez, pero el mismo es inexistente.

Por lo tanto, el despacho no puede desconocer la omisión de la carga probatoria en cabeza de la parte demandante de un precepto que alegó dentro del proceso pero que no fue probado pues la parte demandante no allegó ni solicitó la práctica del dictamen de calificación de la Junta de calificación de invalidez, el cual permitiría tasar la gravedad de sus lesiones y aplicar la presunción.

- **Daño a la salud**

Con respecto al daño a la salud la parte demandante pretende la suma indemnizatoria de 100 SMLMV en favor del señor Jorge Eliecer Narváez, la cual no puede ser reconocida por el despacho. En primer lugar, dado que no es posible establecer una relación de causalidad entre la ocurrencia del evento y los supuestos perjuicios reclamados. Además, en concordancia con los argumentos anteriores el valor pretendido es desproporcional y no se sustenta en ninguna prueba que lo acredite.

Frente a dicho perjuicio, es necesario precisar que el mismo, se repara con base en dos componentes: (i) uno objetivo, el cual está determinado por el porcentaje de invalidez; y, (ii) uno subjetivo, que puede permitir incrementar o disminuir en determinada proporción el primer valor, conforme a las consecuencias particulares y específicas. Al respecto se ha establecido:

[P]or lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una

determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que no debe reconocerse dicho perjuicio, pues no existe un documento que acredite la gravedad de las lesiones que permita tasar una adecuada indemnización

- **Lucro cesante**

Con relación a la petición encaminada como perjuicio material en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, se plantea en el escrito de la demanda que por dicho concepto se debe reconocer la suma total de \$229.575.806. Sin embargo, no hay prueba que permita conceder un perjuicio de esta naturaleza pues no se evidencia que la víctima lesionada haya dejado de percibir sus ingresos. El Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente, que el lucro cesante se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de los perjudicados o víctimas indirectas. Al respecto es importante que el despacho tenga en cuenta que la certificación laboral aportada por la parte actora, con la cual se pretende acreditar los supuestos ingresos mensuales de la víctima, resulta ineficaz desde el punto de vista probatorio. Esto debido a que dicha certificación no se encuentra acompañada de los soportes idóneos, tales como contratos laborales o de prestación de servicios, desprendibles de pago, documentos contables, declaraciones de renta o cualquier otra prueba que permita constatar la regularidad, montos y procedencia de la presunta actividad económica que supuestamente desarrollaba el señor Jorge Eliecer Narváez, la cual no puede ser susceptible de presunción y en consecuencia no es posible su reconocimiento.

Sin embargo, se reitera que es evidente que no se avizoran en el expediente pruebas que acrediten o expliquen cómo es que Bancolombia S.A., Jesús Orlando Arcos Narváez y Andrés Felipe Ortega han sido los generadores de los perjuicios cuya indemnización se demanda, cuando no tuvieron responsabilidad en la conducta generadora del supuesto daño que se pretenden endilgar y por cuanto dichos perjuicios fueron desvirtuados, por lo cual se insiste al despacho respetuosamente que niegue las pretensiones de la demanda.

### **CAPÍTULO III. ANÁLISIS FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA REALIZADO POR BANCOLOMBIA S.A., JESÚS ORLANDO ARCOS NARVÁEZ Y ANDRÉS FELIPE ORTEGA**

#### **A. NO SE PROBÓ LA MATERIALIDAD, NI REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO POR PARTE DEL ASEGURADO, POR LO TANTO, NO ES EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.**

No se demostró dentro del proceso que Bancolombia S.A como asegurado, Jesús Orlando Arcos como locatario y Andrés Felipe Ortega como conductor del vehículo de placas WDK 252 fueran los responsables de los presuntos daños causados a la parte demandante, por lo que no es

posible entenderse comprometido el asegurador por riesgos que no le fueron trasladados por el tomador y/o asegurado.

En el contrato de seguro contenido en la Póliza de Autos Pesados No. AA044574, se pactó como uno de los amparos el de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el vehículo asegurado de placas WDK 252. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, no se probó durante todo el proceso que los demandantes hayan causado los supuestos de hecho y de los consecuentes perjuicios que alega la parte demandante, por lo tanto, el riesgo asegurado no se estructuró por parte de la entidad. En ese mismo sentido los hechos y pretensiones de la demanda carecen de cobertura bajo la póliza de seguro utilizada como fundamento del llamamiento en garantía, pues no se cumplió la condición a la que está sometida la obligación de la aseguradora, esto es, que se realice el riesgo asegurado en los términos del contrato de seguro.

En efecto, al no darse los elementos que permitan declarar la responsabilidad del asegurado, no hay fundamento para afectar la póliza mencionada por ausencia de realización del riesgo asegurado, es decir que en el presente asunto no se ha estructurado un siniestro, lo que deviene en que no se cumple la condición esencial para que surja la obligación contractual de resarcir a cargo de mi representada.

En relación a lo mencionado el artículo 1072 del Código de Comercio define el siniestro como: - *“ARTÍCULO 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado”*

Quedó claramente expuesto que el riesgo asegurado no se realizó por cuanto dentro del expediente no existe ningún elemento útil, necesario y pertinente que permita demostrar que, por parte de Bancolombia S.A como asegurado, Jesús Orlando Arcos como locatario y Andrés Felipe Ortega como conductor existió una acción u omisión que hubiere desencadenado la ocurrencia de los hechos. Por lo tanto, no se cumplen las condiciones generales y particulares bajo las cuales se suscribió el amparo de responsabilidad civil extracontractual de la Póliza No. AA044574, en el sentido que la entidad asegurada no es la responsable de los daños alegados por la parte demandante.

## **B. SE DEMOSTRÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO FRENTE AL DEMANDADO JESÚS ORLANDO ARCOS**

De acuerdo con las pruebas documentales obrantes en el expediente, se tiene que el día 12 de septiembre de 2018 se celebró la audiencia de conciliación extrajudicial en la Procuraduría 183 Judicial I para Asuntos Administrativos, medio de la cual el señor Jorge Eliecer Narváez y otros convocaron al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, Bancolombia S.A., Jesús Orlando Arcos y Andrés Felipe Ortega. Por lo tanto, se entiende que en dicha fecha la víctima hizo la reclamación al locatario del vehículo asegurado y pone en conocimiento los hechos.

Ahora bien, el llamamiento en garantía realizado por el señor Jesús Orlando Arcos Narváez se realizó el 14 de febrero de 2023, es decir, después de más de 2 años desde que tuvo

conocimiento de los hechos, lo cual hace prescribir la acción derivada del contrato de seguro, según lo estipula el artículo 1081 del Código de Comercio, que refiere:

“Prescripción de Acciones. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.

Al respecto el Consejo de Estado, ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto al sustento de la excepción de la prescripción extintiva, la Sala concluye que en este caso debe partirse de la aplicación del inciso segundo del artículo 1081 del estatuto mercantil, esto es, el de la prescripción ordinaria de dos (2) años, contados a partir del conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, es decir, del conocimiento que tuvo o pudo tener la Superintendencia del hecho que en la demanda adujo como constitutivo del siniestro. Esto por cuanto la Superintendencia goza de calidad de tomadora y asegurada de la póliza expedida por QBE y, por ende, es la parte “interesada” o, de otra manera, es el sujeto “directa y primariamente envuelto en [el] contrato de seguro” De esta manera, como la Superintendencia es la que ostenta el interés asegurable y es claramente la legitimada para reclamar el pago del siniestro amparado por la póliza 92100000480, según lo previamente analizado, en su contra corre la prescripción ordinaria de dos (2) años desde el conocimiento del hecho que adujo como constitutivo de siniestro amparado por dicha póliza y en el que funda su acción, pues este tipo de prescripción, se reitera, es de raigambre subjetiva en tanto presupone el conocimiento del hecho que da base a la acción.”<sup>4</sup>

En consecuencia, en el improbable caso que se condene al señor Jesús Orlando Arcos a la reparación del daño causado a los demandantes, no se podrá trasladar la obligación a la Aseguradora por cuanto se demostró que se extinguieron las obligaciones pactadas en la Póliza de Seguro No. AA044574.

**C. QUEDÓ PROBADO QUE LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C NO PUEDE EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA AUTOS PESADOS No. AA044574**

Sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato. Las condiciones determinadas en el contrato de seguros se encuentran sujetas a la disponibilidad de la suma asegurada. La ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de nuestro asegurado.

---

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de agosto de 2021, Exp. 50761

Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1079 del Código de Comercio que señala: *“El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”*

Para el caso concreto se tiene que en la Póliza Autos Pesados No. AA044574 se pactaron los siguientes límites de valor asegurado:

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO
Valor Comercial del Vehículo	\$228,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
- Lesiones, Muerte y/o Daños a Bienes de Terceros	\$2,000,000,000.00
- Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso	\$1,000,000,000.00
COBERTURAS AL VEHÍCULO	
- Pérdida Total por Daños	\$228,000,000.00
- Pérdida Total por Hurto o Hurto Calificado	\$228,000,000.00
- Pérdida Parcial por Daños	\$228,000,000.00
- Pérdida Parcial por Hurto o Hurto Calificado	\$228,000,000.00
- Terremoto, Temblor y/o Erupción Volcánica	\$228,000,000.00
- Actos Mal Intencionados de Terceros, Grupos Subversivos, Terroristas o al Margen de la Ley	\$228,000,000.00
- Amparo Patrimonial	
- ASISTENCIA JURIDICA	
- Lesiones (Proceso Penal)	
- Homicidio (Proceso Penal)	
- Ordinario o Ejecutivo (Proceso Civil)	
- Contencioso Administrativo	
- Administrativo de Tránsito	
AMPAROS ADICIONALES	
- Gastos de Grúa, Transporte y Protección del Vehículos Accidentado	
- Auxilio por Muerte del Conductor (incluye Ayudante o Acompañante)	\$40,000,000.00
- Obligaciones Financieras	
- Lucro Cesante por Paralización del Vehículo	

Siendo el límite máximo de responsabilidad de la compañía por todos los daños y perjuicios causados por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia del seguro. Por lo tanto, es indispensable recordar al despacho que entre el primer grupo familiar inicialmente demandante en el presente litigio y mi representada se firmó un contrato de transacción por valor de \$115.000.000 con el fin de indemnizar los perjuicios causados por el fallecimiento del señor Gustavo Dorado Cabrera (q.e.p.d.). El pago de dicha suma derivó en afectar la Póliza No. AA044574 y por ende el valor asegurado disponible disminuyó.

Por lo tanto, en el remoto evento de que prosperaren una o algunas de las pretensiones de la demanda, debe tenerse en cuenta que el despacho no podrá condenar a mi representada a pagar una suma mayor a la asegurada disponible. De ninguna manera el demandante podrá obtener una compensación más allá del límite de la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza, siendo el límite máximo de responsabilidad de la compañía por todos los daños y perjuicios causados por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia del seguro

#### **D. QUEDÓ PROBADO QUE EN LA PÓLIZA AUTOS PESADOS No. AA044574 SE PACTÓ UN DEDUCIBLE QUE NO PUEDE PASARSE POR ALTO**

En la mencionada póliza, se estipuló adicionalmente la existencia de un deducible, el cual legalmente está permitido, luego que se encuentra consagrado en el artículo 1103 del Código de Comercio; este reza que: *“(…) Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales*

*cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original (...)*

Sin aceptar responsabilidad alguna y a modo ilustrativo, debe tenerse en cuenta, que el deducible, el cual corresponde a la fracción de la pérdida que debe asumir directamente y por su cuenta la entidad asegurada, para el caso que nos ocupa corresponde a la suma de \$1.200.000. El despacho deberá tener presente que, al momento de atribuir responsabilidades sobre el cubrimiento del presunto daño antijurídico causado, que a la asegurada les correspondería cubrir el monto señalado, y que a la aseguradora le concerniría, eventualmente, el saldo sobrante. Es decir que, en el improbable caso de endilgarse responsabilidad a Bancolombia S.A, ésta tendría que cubrir el porcentaje anteriormente indicado como deducible y, a la aseguradora le atañería cubrir el valor del saldo.

#### **CAPÍTULO IV. PETICIÓN**

En mérito de lo expuesto, de manera respetuosa, ruego:

**PRIMERO:** Negar todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declarando probadas las excepciones de fondo y mérito presentadas por **BANCOLOMBIA S.A., JESÚS ORLANDO ARCOS, ANDRÉS FELIPE ORTEGA**, y en consecuencia se absuelva a mi representada a pago alguno por conceptos de indemnizaciones por los supuestos perjuicios alegados.

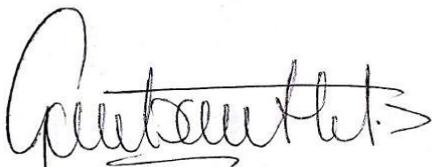
**SEGUNDO:** En el remoto evento en que los argumentos esbozados en el presente escrito no fueran de su convencimiento, no pierda de vista las limitaciones sobre la cobertura de la póliza con fundamento en la cual **BANCOLOMBIA S.A., JESÚS ORLANDO ARCOS y ANDRÉS FELIPE ORTEGA** llamaron en garantía a mi representada, esto, de conformidad con las consideraciones expuestas por mi defendida en esta oportunidad procesal.

#### **CAPÍTULO V. NOTIFICACIONES**

A la parte actora y a los convocados, en las direcciones consignadas en los escritos de demanda y contestaciones de la misma.

Al suscrito, en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 oficina 212 de la Ciudad de Cali (V), correo electrónico: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**  
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá  
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.